

Las autonomías se preparan para una oleada de ERE en los ayuntamientos

LA VANGUARDIA.- Economía | 17/10/2011



DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Por primera vez en la historia, los ajustes de **empleo** se han extendido al sector público, y en particular a los ayuntamientos. Es toda una novedad que las autoridades laborales aún no saben con certeza cómo afrontar desde el punto de vista legal, pues la fórmula de los expedientes de regulación de empleo (**ERE**) está prevista para extinguir o suspender contratos sólo en el ámbito de las empresas por motivos de pérdidas o de reconversión, no para entidades que como los **ayuntamientos** no tienen como objetivo principal la obtención de beneficios.

Por este motivo, las autonomías intentan coordinar criterios, y en el caso de Catalunya la Generalitat ha decidido adelantarse al estallido del problema e impulsar una negociación con las asociaciones municipalistas y con los sindicatos.

"Queremos un marco de negociación similar al que se hizo en su día con la sanidad concertada, donde se anticipaba una pérdida de al menos 5.000 empleos, que al final no se ha producido porque se pactaron ajustes salariales y organizativos", dice Ramon Bonastre, director general de Relacions Laborals de la Generalitat. Bonastre tiene previsto participar hoy en el Ministerio de Trabajo en una reunión con representantes de todas las otras comunidades autónomas para tratar de unificar criterios ante los ERE que se esperan.

Los recortes de los que se está hablando ahora afectan únicamente al personal laboral, no a los funcionarios, un colectivo que no puede perder su empleo a menos que se produzca una reforma legislativa de gran calado y muy poco probable. Otra cosa es la no renovación de contratos temporales, lo que se ha venido en llamar ERE silenciosos, que llevan tiempo aplicándose.

Ramon Bonastre estima que los ajustes municipales van a cobrar fuerza a medida que se vayan elaborando los presupuestos para el 2012, y pronostica que los mayores problemas se van a presentar en municipios pequeños, de unos pocos miles de habitantes. En la actualidad, hay 948 municipios en Catalunya, que junto con las diputaciones emplean a algo más de 100.000 personas.

La intención de Ramon Bonastre es convocar en breve a la Federació de Municipis y a la Associació Catalana de Municipis (ACM), además de a los sindicatos más representativos, para mitigar el impacto. Fuentes de la federación, que preside Manel Bustos, rechazaron comentar la

iniciativa en espera de que se concrete. Por su parte, Miquel Buch, presidente de la ACM, defendió la necesidad de establecer un marco de negociación para hacer lo menos traumáticos posibles los ajustes de personal que muchos ayuntamientos necesitan. Porque, según Buch, los gastos de personal representan casi un 50% del gasto municipal. "La etapa de crecimiento ya ha pasado y ahora es el momento de replantearse la situación. Hay que hablar", dijo Buch. En su opinión, son posibles medidas alternativas, entre las que citó una posible reducción de sueldos o una ampliación de la jornada laboral, lo que podría permitir mantener servicios pero con menos coste. Recuerda, no obstante, que en esta etapa de penuria económica los ayuntamientos están sufriendo mucho debido a que están obligados a realizar tareas que no les corresponderían, como hacer cumplir normativas que aprueba el Parlament, por ejemplo el control de ruidos. "La norma es buena pero su aplicación requiere efectivos", dice.

Fuera de Catalunya, hay ayuntamientos que han dado ya el paso. El de Parla (Madrid) ha planteado 70 despidos y el de Gáldar (Gran Canaria) ha recurrido a la fórmula del ERE para despedir a 54 empleados municipales y suspender temporalmente los contratos de otros 87.